



INFORME DE COYUNTURA POLÍTICA

WWW.LYD.ORG

ISSN 2735-7589

N° 22
ENERO 2024

Contenido

TEMA DEL MES. RESONANCIAS DEL PLEBISCITO: EL ESCENARIO POLÍTICO AL INICIO DEL 2024	3
CHILE BAJO LA LUPA. UNA ALECCIÓN QUE IMPACTA A LA POLÍTICA, PERO NO A LA CIUDADANÍA.....	5
ALERTA CONCEPTUAL. EXTRACTIVISMO.....	7

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

TEMA DEL MES

RESONANCIAS DEL PLEBISCITO: EL ESCENARIO POLÍTICO AL INICIO DEL 2024

Habiendo quedado atrás el plebiscito constitucional, es pertinente evaluar el impacto que éste tuvo en el escenario político actual. En primer lugar, habría que señalar que, tras largos cuatro años, la agenda constitucional se ha extinguido, a lo menos, hasta el fin de esta administración. Lo anterior, es una noticia positiva para el país y una buena oportunidad para la clase política, ya que abre una ventana de oportunidad para reconectar con las reales prioridades ciudadanas.

A nivel político, el plebiscito constitucional no provocó un impacto ciudadano de amplio alcance. Los niveles de aprobación presidencial continúan estables en torno al 30%, vale decir, no hubo capitalización, en términos de un aumento significativo de la adhesión al Gobierno y al Presidente.

Por otro lado, la crisis de seguridad continúa siendo el eje central del ordenamiento político junto con la cada vez más relevante temática de la corrupción, la que ha conmocionado a la ciudadanía tras el Caso Convenios y otros escándalos que también se han dado a conocer. Esta temática es especialmente compleja de administrar para la generación que hoy está en el oficialismo, puesto que fueron ellos quienes elevaron las banderas de la transparencia y probidad como aspectos distintivos de su acción política. Por último, las temáticas asociadas al deterioro del escenario económico, como es el control de la inflación y la falta de generación de mayor empleo, continúan estando muy presentes en el actual contexto.

Por su parte, el Gobierno, equivocadamente ha visto en la opción *En contra*, un hito para dinamizar y relevar la tramitación legislativa de dos de sus reformas programáticas más emblemáticas: la reforma de pensiones y el denominado Pacto Fiscal.

Donde el plebiscito sí logró generar mayor nivel de movimiento fue en el campo del perfilamiento de los liderazgos presidenciales, donde, se observa un ascenso de la figura de la ex Presidenta Michelle Bachelet dentro de las preferencias, aunque situándose a una distancia significativa de los principales candidatos de la oposición: Evelyn Matthei y José Antonio Kast, quienes lideran la carrera por La Moneda. Con todo, las condiciones post plebiscitarias descritas, exigen el máximo esfuerzo en términos de unidad por parte de las fuerzas políticas opositoras.

En primer lugar, porque el oficialismo intentará ver en los puntos de fuga, vale decir, aquellos espacios donde no existe una mirada unitaria opositora, oportunidades para hacer avanzar sus reformas. El caso de la Reforma de Pensiones es un reflejo de lo anterior, en términos de que el oficialismo ha sido capaz de sumar a las fuerzas “no alineadas” de la oposición como el PDG y Demócratas, para así, probablemente lograr aprobar en la Cámara de Diputados su propuesta previsional de dividir el incremento del 6% de cotización en un 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo de reparto.

El Senado, será una segunda prueba de fuego para la oposición, en la cual, se verá la capacidad de cohesión, disciplina y convicción del amplio abanico opositor por defender definiciones con amplios niveles de respaldo ciudadano, como es el hecho de que el 100% del aumento de la cotización tenga como destino las cuentas previsionales individuales de los afiliados.

Un segundo ámbito que exigirá unidad y pragmatismo se vincula a la necesidad de establecer una política de alianzas entre las fuerzas opositoras. Sólo a través de ésta, la oposición podrá enfrentar el desafío de arribar a una unidad efectiva para el ciclo electoral municipal y regional, cuyas elecciones se celebrarán en octubre de este año.

Pese a todos los reveses que ha experimentado esta administración de Gobierno, el granítico 30% de respaldo al Presidente Boric, sumado a liderazgos presidenciales del progresismo que aunque de manera incipiente, registran un alza en sus niveles de valoración, sumado al hecho de que las fuerzas de Gobierno ya abrocharon una alianza electoral amplia desde la DC al PC, perfectamente podrían hacer del oficialismo una fuerza electoral competitiva tanto en el ámbito municipal, regional, pero también parlamentario y presidencial. Asimismo, cada vez parece ser más claro el impulso de un Partido Socialista -que gana en peso específico en la interna del oficialismo- por converger con el Frente Amplio.

Si bien es cierto que, en la región, se ha desplegado con fuerza un ciclo “oposicionista” en el cual, 8 de cada 10 elecciones están siendo ganadas por fuerzas contrarias al Gobierno de turno, esta estadística, no es garantía de éxito alguna, per se.

La oposición requiere liderazgos más incidentes, organización, diseño y disciplina. Si algo mostró el plebiscito constitucional de diciembre de 2023, es que, para la oposición, el éxito no está garantizado.

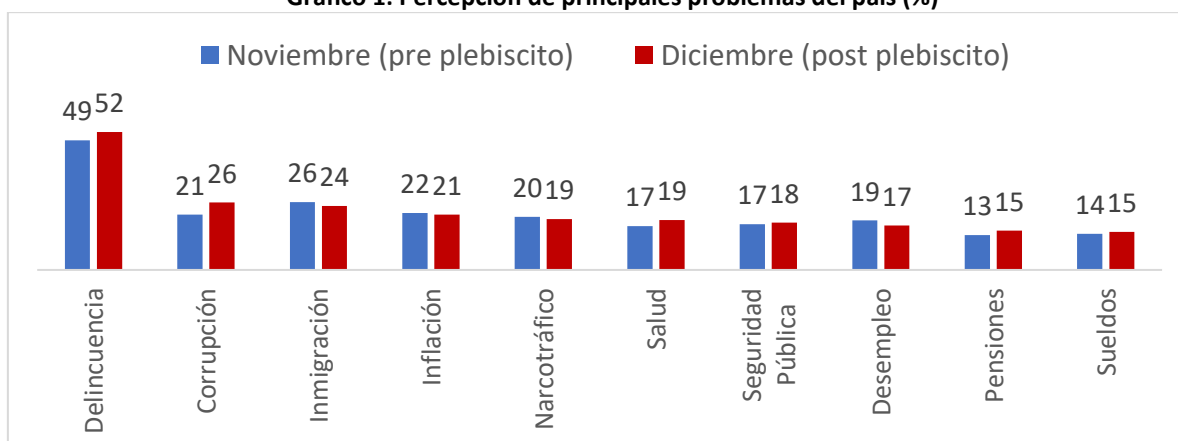
CHILE BAJO LA LUPA

UNA ELECCIÓN QUE IMPACTA A LA POLÍTICA, PERO NO A LA CIUDADANÍA

Una elección con bajo impacto en la ciudadanía

A pesar de haber sido uno de los eventos más discutidos del 2023, los resultados de la elección del pasado 17 de diciembre tuvieron un bajo impacto en la ciudadanía. La encuesta Plaza Pública Cadem de la última semana de diciembre reveló que, para los chilenos, la noticia más importante del año que acaba de concluir corresponde a la situación de la delincuencia y el asesinato de los carabineros Daniel Palma y Rita Olivares, con un 43% de las menciones, mientras que “el triunfo del *En contra* en el plebiscito” se ubica en quinto lugar del listado con un 16%. Asimismo, al revisar lo que la ciudadanía califica como los principales problemas del país, según revela la encuesta Pulso Ciudadano (Activa), se observa que la mayoría de las demandas se mantuvieron inalteradas al compararse los datos previos y posteriores a la elección (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Percepción de principales problemas del país (%)



Fuente: Pulso Ciudadano – Activa.

La irrupción de Michelle Bachelet como figura del oficialismo

Donde sí existieron secuelas del plebiscito fue en el ámbito político, siendo la más importante de ellas la irrupción de la ex presidenta Michelle Bachelet como potencial candidata presidencial del oficialismo para las presidenciales del año 2025. Su rol en la campaña del *En contra*, sumado al apoyo público que ha brindado al gobierno y a su propia imagen positiva (que alcanza un 54% según la encuesta Cadem de la 2^{da} semana de enero), la han dotado de un buen piso para competir. Escenario que, si bien ella se ha cuidado de no confirmar, tampoco ha negado de manera contundente a los medios.

De esta manera, en la última encuesta Critería, realizada en enero, la ex Presidenta alcanzó un 10% de las preferencias presidenciales (un crecimiento de 5 pp respecto a diciembre), ubicándose en tercer lugar tras la alcaldesa Evelyn Matthei (24%) y José Antonio Kast (17%) y por sobre otras cartas del sector como la ministra Camila Vallejo (6%).

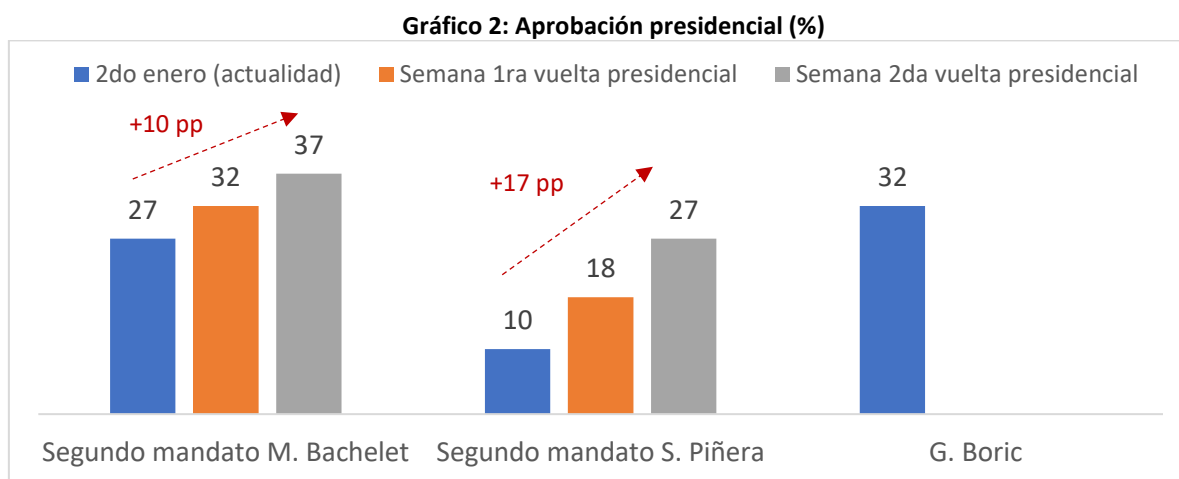
El potencial electoral de la izquierda

En estos casi dos años de gestión de Gabriel Boric, ha quedado claro que aproximadamente un tercio de la población respalda al Gobierno. Aunque resulte cierto que tener tan solo un 32% de aprobación

a la gestión, que es lo que señala la última encuesta Cadem, no es una buena noticia para ningún gobierno, cabe recordar que estos últimos poseen ciclos que, justamente, se expresan en las cifras de aprobación ciudadana.

En este sentido, al observar las tendencias respecto a esta variable, lo usual es que los gobiernos comiencen con una buena aprobación, para luego ir disminuyendo a medida que avancen los meses, alcanzando los peores resultados durante el segundo y tercer año de mandato y, finalmente, recuperarse paulatinamente durante el cuarto año.

Teniendo en consideración estos antecedentes, es que el tercio de apoyo que hoy obtiene el Presidente Boric deja de ser un pasivo y se transforma en un potencial activo. Así, haciendo comparaciones con los anteriores dos gobiernos, observamos, en primer lugar, que hoy el presidente Boric cuenta con un mayor índice de apoyo que el que registraban los ex presidentes Bachelet y Piñera al mismo momento de sus respectivos últimos mandatos. En segundo lugar, constatamos que los niveles de aprobación de los ex presidentes Bachelet y Piñera fueron sustancialmente mayores al momento de realizarse la elección presidencial que eligió a sus sucesores (ver Gráfico 2).



Fuente: Plaza Pública Cadem.

En esta línea, si se mantiene la misma lógica, podemos afirmar que se encuentra dentro del rango de posibilidades que el actual Gobierno alcance niveles de aprobación significativamente superiores hacia fines del próximo año. Esto significaría que el oficialismo tiene posibilidades de disputar la próxima elección presidencial de forma competitiva, sobre todo si es que su carta es una figura como Michelle Bachelet que mantiene un amplio respaldo ciudadano y que logra aunar a distintas facciones de la izquierda, desde los partidos de la ex Concertación al Frente Amplio y el Partido Comunista.

Ante este escenario y a pesar de las tendencias internacionales, en donde las fuerzas de oposición han ganado la mayoría de las elecciones en las que compiten, ningún sector político puede pensar que las próximas elecciones presidenciales están definidas.

ALERTA CONCEPTUAL EXTRACTIVISMO

Hace varios años hemos escuchado críticas por parte de sectores de la izquierda al “modelo extractivista”, sedimentándose este adjetivo en la discusión sobre los caminos al desarrollo que debe tomar el país. Por ejemplo, el Presidente Boric en su campaña presidencial señalaba que su gobierno será la primera administración ecologista de la historia “*implementando políticas sustentables en todas las materias y así avanzar al fin del extractivismo, que pone en peligro la naturaleza y la vida acelerando la grave crisis climática que vivimos*”¹.

A pesar de sus críticas y la usual utilización de *extractivismo* en conversaciones sobre “el modelo”, poco se ha profundizado en torno a los alcances de este concepto, particularmente qué significa para aquellos sectores que más lo critican. En este sentido, pareciera ser que, en torno a este signifiante, la lucha de los sectores de izquierda en el país ha sido por posicionarlo como un adjetivo negativo, más que por dotarlo de contenido. De esta forma, al momento de escuchar o leer *extractivismo* en alguna discusión, inmediatamente tenderíamos a catalogar aquello que acompaña a este concepto como algo negativo.

A modo general, el concepto hace alusión a la actual forma de generación y acumulación de riqueza que tendrían ciertos países, principalmente latinoamericanos, siendo un aspecto fundamental de este modelo la apropiación masiva de recursos naturales para posteriormente ser exportados con un modesto nivel de procesamiento a mercados internacionales². De esta forma, se produciría una disputa entre quienes explotarían el recurso y las comunidades cercanas a estos lugares, ya que la riqueza extraída de estos “territorios³” a raíz de sus recursos sólo sería aprovechada por quienes la explotan. Bajo esta dialéctica, extractores-comunidades, los sectores izquierda más radical plantean una relación extrema y antagónica entre estas dos dimensiones, sedimentando un discurso público sobre el modelo económico asociado a altos niveles de conflictividad. “En nuestro país hay personas obligadas a habitar #ZonasDeSacrificio por culpa del *extractivismo* voraz de un modelo económico que no da más”, señaló Revolución Democrática en su página de Facebook⁴.

A pesar de la resistencia de los sectores de izquierda hacia este modelo, especialmente en términos de generación de riqueza y el desarrollo comunitario, la evaluación del Estado como propietario y explotador de estos recursos difiere significativamente de la de un ente privado. Esta situación nos remite en alguna medida a los tiempos cuando diversos Estados, especialmente en Latinoamérica, adoptaron enérgicamente las propuestas de la CEPAL, resultando en la implementación de modelos alineados con la Teoría de la Dependencia, dando lugar a los Modelos de Sustitución de Importaciones y a un marcado proteccionismo estatal en la Región.

Desde la perspectiva de la izquierda, el Estado, en su rol de propietario y explotador, no sería percibido como una entidad pernicioso para las comunidades locales, dirigiendo sus críticas hacia el sector privado. Este último, aun sin poseer la propiedad de los recursos naturales que explota y pese a que podría contar con una mayor eficiencia en esta tarea, tendería a generar más externalidades negativas que su contraparte estatal. Por consiguiente, las críticas esbozadas por los sectores de izquierda sobre la escasa

¹ Boric, G. (2021). <https://twitter.com/GabrielBoric/status/1457845496689594373>

² Maillet et al (2021). Conflicto, territorio y extractivismo en Chile. Aportes y límites de la producción académica reciente. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=50718-34022021000300059

³ Para mayor profundización sobre este concepto, ver Informe Coyuntura Política de diciembre 2023

⁴ <https://www.facebook.com/RevolucionDemocraticaChile/videos/acuerdodeescazu/669928413920402/>

generación de riqueza, los conflictos extractores-comunidades y las externalidades negativas inherentes a cualquier industria, se enfocarían principalmente en las empresas privadas.

Esta circunstancia revela una contradicción inherente al uso de este concepto como eje central de un discurso político crítico hacia el modelo económico en su totalidad, pues parece centrarse más en una crítica a las empresas privadas dedicadas a la extracción de recursos naturales, sin reconocer que el Estado también podría generar externalidades iguales o peores. Además, las perspectivas más extremas a menudo pasan por alto el potencial del sector privado, no solo en el desarrollo de estas actividades, sino también en su contribución a la resolución de problemas y al desarrollo de las comunidades donde operan.

Las empresas productivas pueden lograr operaciones sostenibles mediante la implementación de prácticas responsables y el uso de tecnologías avanzadas, reduciendo su huella de carbono mediante el uso eficiente de energías renovables y la minimización del impacto ambiental en la extracción y procesamiento de las materias primas. Por ejemplo, SQM fue recientemente incluida en el *Dow Jones Sustainability Index*, siendo destacadas a nivel mundial como líder en sustentabilidad, aspirando a producir litio carbono neutral para el año 2030⁵.

La influencia de este discurso, que evalúa las actividades de explotación de recursos naturales basándose en quién las lleva a cabo, ha tenido repercusiones concretas en las políticas públicas de desarrollo en Chile. Un ejemplo reciente es la Estrategia Nacional del Litio, cuyo primer eje estratégico es la participación del Estado en todo el ciclo productivo, preferentemente a través de la creación de una empresa nacional de litio. Este camino, marcado por una disminuida presencia privada, no es el más eficaz para generar los incentivos y políticas públicas necesarias para una explotación moderna y sostenible de recursos naturales. Esta aproximación podría resultar en una pérdida de competitividad para el país en la carrera global por posicionarse como un actor clave en la explotación de este mineral.

Esta visión, primordialmente estatal en la explotación de los recursos naturales, nos retrotrae a tiempos y teorías económicas que parecían superadas y deja de lado el rol que cumpliría la empresa privada en la innovación y explotación de los recursos. Es más, hace oídos sordos a propuestas progresistas de algunos economistas que buscan “reformular el capitalismo”, los que son vistos muchas veces como inspiradores de las políticas públicas del Gobierno. Marianna Mazzucato relevó el rol que cumpliría el Estado en la formulación de objetivos comunes para los agentes económicos, con foco en la solución de problemas públicos e incrementar el desarrollo, estableciendo “misiones económicas”. En palabras de la autora, este enfoque de misiones “significa diseñar políticas que catalicen la inversión, la innovación y la colaboración entre una gran variedad de agentes económicos, involucrando tanto a las empresas como a los ciudadanos⁶”.

Con todo, el debate sobre el *extractivismo* en Chile, particularmente en los sectores de izquierda, refleja una tensión entre críticas al modelo económico y la realidad actual de las operaciones productivas en el país. A pesar de la crítica centrada en la explotación privada de recursos naturales y sus impactos negativos, hay una falta de reconocimiento hacia el rol positivo de la empresa privada en la innovación y sostenibilidad de estas actividades. Además, se observa una tendencia a idealizar la participación estatal en la explotación de recursos, ignorando las posibles externalidades negativas hacia las comunidades que también puede generar un Estado *extractivista*.

⁵ Revista Minería Chilena (2023). *SQM es incluida en el principal índice mundial de sustentabilidad*. Disponible en: <https://www.mch.cl/2023/12/19/sqm-es-incluida-en-el-principal-indice-mundial-de-sustentabilidad/>

⁶ Mazzucato M. (2021). *Misión Economía. Una carrera espacial para cambiar el capitalismo*. Editorial Taurus